

CDH

SIMUN XVIII EDICIÓN 2026



VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN GESTIONES MIGRATORIAS

Guías de Estudio



GUÍA DE ESTUDIO CDH CARTA DE LA SECRETARIA GENERAL

Estimados delegados:

¡Bienvenidos a la decimoctava edición de **San Ignacio Model of United Nations!** De parte de todo el comité organizador, nos complace muchísimo que puedan asistir a nuestro preciado modelo, el cual hemos preparado con gran esfuerzo y dedicación.

Este año, la temática central será "**La ruptura del consenso y el desorden global**", un espacio donde ustedes podrán trabajar en problemáticas tanto actuales como históricas. En SIMUN nos regimos por cuatro valores fundamentales: **empatía, responsabilidad, integridad y compromiso**. Por ello, esperamos que durante estos tres días de debate demuestren ser delegados íntegros que honren estos principios. Recordemos siempre que, aunque representen a naciones o personajes, al final del día todos somos seres humanos; medir nuestras acciones para no herir al otro es esencial. Personalmente, siempre llevo conmigo una frase que espero los inspire: *"Es mejor fracasar con honor que triunfar mediante el fraude"*.

A pesar de ser simulaciones, los Modelos de Naciones Unidas nos permiten crecer personal y académicamente. Nos brindan técnicas de negociación para defender nuestras ideas con firmeza, herramientas de oratoria para expresarnos con claridad, liderazgo para inspirar a través del ejemplo y, sobre todo, amistades con personas que nunca imaginamos. Desde el comité organizador de **SIMUN 2026**, deseamos que puedan adquirir o reforzar todas estas habilidades, pues si lo logran, habremos cumplido nuestra tarea: formar hombres y mujeres capaces de estar a la altura de sus sueños.

Por último, disfruten tanto como lo haremos nosotros. Entreguen su mayor esfuerzo y dedicación para que cada segundo valga la pena. Más allá de los reconocimientos, el simple hecho de haber asistido y atreverse a debatir ya los convierte en ganadores. ¡Esperamos con ansias verlos en **SIMUN 2026!**

Sofía García Pérez
Secretaria General SIMUN 2026



Queridos delegados.

Mi nombre es Andrea Serfaty y es un honor ser su presidente de comité para este Simun 2026 en el comité de consejo de los derechos humanos.

Me gustaría comenzar diciendo que siempre he sido una gran fanática de las películas con trasfondos políticos y sobre todo series y películas donde se cuestiona la moralidad y si el fin justifica a los medios. Considero que es importante mencionarlo ya que uno de los pilares de los que vamos a hablar en este comité es que se castiga el acto de bondad para enviar un mensaje político.

Una de las bases para poder llegar a una solución en estos tres días por venir, es que es muy importante que nos escuchemos y no caigamos en una autocomplacencia discursiva que ofrece soluciones teóricas para satisfacer su propia imagen, permaneciendo sordos a las soluciones o argumentos de los demás.

Es por esto que es importante que cada uno de ustedes no tenga miedo de alzar la voz ante una posible injusticia, ya que cada uno de ustedes es un líder en potencia con la capacidad de transformar la realidad de millones en el futuro. No olviden que, en la diplomacia, el silencio suele ser el aliado más fiel de la opresión. Les instó a que este debate no se quede en la superficie del protocolo, sino que profundicen en la ética de la acción y la valentía de la empatía, espero que estos tres días sean el reflejo de una voluntad colectiva que se atreva a cuestionar lo establecido para construir algo mejor.

La búsqueda de justicia no es un ejercicio académico, es un compromiso con la dignidad humana, normalmente nos buscamos refugiar en la comodidad de la soberanía o tratados para evitar mirar a los ojos el sufrimiento que nuestras decisiones o falta de éstas pueden permitir, si bien en las películas nos enseñan que el conflicto moral suele resolverse en un clímax dramático, en la vida real, el “fin justifica los medios” suele ser una pendiente resbaladiza que cuando nos damos cuenta ya hemos perdido nuestra brújula ética en el camino, por eso les pregunto: ¿se quiere solo defender intereses o ha personas?.

Sin más que agregar les deseo el mayor de los éxitos, sientanse libres de contactarme si necesitan algo. les deseamos el mayor de los éxitos ¡Suerte!

Andrea Serfaty
presidenta de mesa
andreaserfaty4@gmail.com



Historia del comité

CDH fue fundado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a nivel mundial el 15 de febrero de 2006. El Comité de Derechos Humanos se formó en medio de la Segunda Guerra Mundial, luego de que la sociedad global decidiera modificar las regulaciones y leyes para prevenir situaciones similares en el futuro. A consecuencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, un tratado basado más en principios que en normativas, las naciones pasaron dos décadas polarizadas en cómo implementar esas ideas en normas más aplicables. Fue en 1966 cuando el Pacto fue ratificado en la Asamblea General de la ONU, y el Comité se estableció como el cuerpo responsable de velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales. En los años sesenta se llevó a cabo la firma del Pacto y, a partir de allí, comenzó el trabajo del Comité como entidad designada para garantizar la ejecución de los derechos humanos de forma correcta.

Su historia alcanzó un hito clave con el ingreso de su Primer Protocolo Facultativo, lo cual le permitió al Comité recibir denuncias sobre personas individuales contra sus propios Estados. Dicha decisión transformó al Comité de ser, antes, una manera de evaluar informes gubernamentales, en una entidad encargada de tutelar a los ciudadanos de manera directa. Sus dictámenes

también comenzaron a influir en las leyes nacionales de la década de 1980 y 1990, ayudando a derogar las leyes discriminatorias, interrumpir ejecuciones arbitrarias y garantizar la libertad de prensa en varias partes del mundo.

El Comité está conformado por dieciocho expertos cuya reputación y cualidades morales justifican su elegibilidad. no necesariamente son expertos de un país determinado; se dedican a trabajar en representación de todos los seres humanos y sus derechos. En su trabajo, como en la mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas y similares, el comité se centra en la interpretación de los derechos humanos básicos y las acciones que realizan los estados en torno a ellos.

A lo largo de su historia, el Comité ha tomado un papel relevante en la protección de los derechos humanos. Ha creado un sistema de documentos periódicos que exige que los gobiernos registren su seguimiento de los derechos humanos en sus respectivos países. Además, el Comité puede recibir reclamos de personas cuyos derechos han sido vulnerados. Esto ha permitido que el Comité fuera el último recurso para las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias y censura.

El Comité ha publicado Una Misión de Objetivos para guiar su interpretación de los derechos humanos. Ha aprobado Observaciones Generales como guías

para aplicar los derechos humanos y ha podido adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Esta ha sido una ventaja, ya que el Comité no sólo ha mantenido vigentes sus conclusiones, sino que también ha mejorado su visión de los derechos humanos. El Comité ha definido que el derecho a la vida significa prevenir situaciones extremas de vulnerabilidad. Con esto, el Comité ha ampliado la visión de los derechos humanos y ha permitido que no se limite exclusivamente a la no interferencia del Estado.

También el Comité ha enfrentado desafíos y críticas. Una de las principales críticas es que carece de mecanismos coercitivos directos para obligar a los gobiernos a cumplir con las decisiones. El Comité depende principalmente de la presión internacional y de la disposición de las cortes nacionales para introducir en su derecho nacional los estándares de derechos humanos propuestos por la ONU. Aunque esto es un inconveniente, el Comité sigue siendo un actor fundamental en la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Su labor ha sido crucial para dotar a los derechos humanos de estatus de derechos inalienables que requieren un control internacional continuo y especializado.

Antecedentes Históricos

La deportación, tal como la conocemos en la actualidad, no siempre fue un instrumento administrativo masivo; sus raíces están en prácticas de banquillo y

exilio político. Sin embargo, su naturaleza cambió drásticamente con el fortalecimiento de los Estados-nación a finales del siglo XIX y principios del XX. El control de la movilidad humana dejó de ser un asunto relacionado con el libre mercado laboral y se convirtió en uno de los cimientos de la seguridad nacional al establecerse leyes que excluyeron a determinados grupos, como la Chinese Exclusion Act en Estados Unidos o las políticas de "limpieza" poblacional durante la Europa entre guerras. Esta transformación de paradigma estableció la figura del "extranjero indeseable", lo que posibilitó que las naciones desarrollaran estructuras burocráticas y policiales con el único objetivo de identificar, arrestar y expulsar a personas.



Durante décadas, estas prácticas han evolucionado, transformándose de acciones esporádicas de soberanía en sistemas automatizados y permanentes que funcionan con una lógica de vigilancia continua, en la que el estatus migratorio determina cuán vulnerable es un individuo frente al poder del Estado.

Las primeras legislaciones de exclusión, fundamentadas en criterios económicos, raciales y de salud, fueron creadas por las naciones a finales del



siglo XIX como resultado de la migración masiva promovida por la Revolución Industrial. En EE. UU., la Ley de Exclusión China, promulgada en 1882, es un acontecimiento histórico significativo, ya que fue el primer caso en que se argumentó la salvaguarda de la economía local para impedir la llegada y facilitar la deportación de un grupo étnico particular. Simultáneamente, en Europa.

La Primera Guerra Mundial provocó la desaparición de los grandes imperios (Austrohúngaro, Otomano y Ruso), lo que dio lugar a millones de apátridas.



Fue a lo largo de este período que se estableció el uso estandarizado del pasaporte y la visa. Lo que antes era un movimiento humano relativamente libre se volvió un sistema de vigilancia en el que la carencia de documentos se convirtió, por primera vez en la historia, en una razón para la deportación forzada y, con ello, se estableció jurídicamente el concepto de "migrante irregular".

Después del caos impuesto por las guerras mundiales, el manejo migratorio dejó de ser un tema meramente burocrático y adquirió un carácter casi militar. En el medio del siglo XX, la Guerra Fría terminó por sellar este destino al convertir el movimiento de seres humanos en un

elemento de ajedrez ideológico; ya no se echaba a alguien solo por su salud o su etnia, sino también por lo que representaba para el bloque al que pertenecía. Esta etapa fue fundamental porque institucionalizó la sospecha: el inmigrante pasó de ser considerado un viajero a ser clasificado como una posible amenaza para la estabilidad interna del Estado. En este contexto fue donde se perfeccionaron los métodos de interrogación y los registros de identidad.



A finales del siglo pasado, el fenómeno se tornó aún más radical con la "securitización" de las fronteras, un procedimiento en el que la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado se combinó directamente con el control de la migración. Una falta administrativa, que antes se consideraba como tal, comenzó a ser manejada bajo una lógica penal, dando lugar a un sistema híbrido que comúnmente recibe el nombre de "crimigración". Para entender el motivo por el cual hoy en día se ven drones, muros y centros de detención de alta seguridad en sitios donde anteriormente solo era necesario un permiso de trabajo básico, este

antecedente es crucial. El Estado moderno ha encomendado a la tecnología lo que antes pertenecía a la ley, estableciendo una red de vigilancia invisible que persigue al individuo incluso años más tarde de haber cruzado la frontera.

Planteamiento del Problema

El núcleo de la problemática está en la tensión innegociable entre los derechos humanos universales y la soberanía territorial de las naciones. La deportación causa una fractura en múltiples dimensiones: a nivel social, ocasiona una desarticulación familiar traumática que condena a comunidades completas a vivir en condiciones precarias y tiene un impacto en el desarrollo psicológico de los niños y adolescentes que, frecuentemente, tienen una nacionalidad diferente a la de sus progenitores. La deportación masiva, en el campo de la economía, interrumpe el flujo de remesas que mantienen las economías de los países en vías de desarrollo y elimina repentinamente fuerza laboral en sectores fundamentales.



De esta manera se establece un círculo vicioso de pobreza que fomenta la emigración. Desde el punto de vista ético, la propuesta pone en duda la legitimidad de penalizar el acto de

desplazarse por necesidad; y esta misma se transforma en un instrumento de control biopolítico que perpetúa a millones de individuos en una "muerte civil" incesante, en la que el temor a ser expulsado es empleado para tolerar condiciones laborales abusivas y de explotación sin posibilidad alguna de denuncia.

Desde el punto de vista de la seguridad y la macroeconomía, recibir a un gran número de deportados supone un reto desmedido para las economías en desarrollo, que con escasa frecuencia tienen la infraestructura necesaria para integrar de manera repentina a miles de ciudadanos en su mercado laboral. En los países del Triángulo Norte de Centroamérica, donde las remesas constituyen una porción considerable del PIB, la interrupción repentina de estas produce una reducción económica instantánea en las áreas rurales. Esto provoca un incremento en los niveles de pobreza extrema que inicialmente impulsaron la migración.



Asimismo, la presión sobre los servicios públicos sanitarios y de vivienda en las ciudades que acogen a los inmigrantes puede provocar tensiones sociales entre estos últimos y los habitantes

locales. La deportación, al no abordar las raíces estructurales que motivaron la salida, se transforma en un paliativo costoso y temporal que tiende a perpetuar un ciclo de migraciones repetitivas. En este ciclo, el individuo se ve obligado a intentar nuevamente el tránsito para pagar las deudas adquiridas durante su primer viaje o para reunirse con su núcleo familiar.



Acciones Pasadas

En el pasado, controlar fronteras era, esencialmente, poder total estatal pero la evolución de los acuerdos de derechos humanos cambió esto. Estableció que el control fronterizo no es una excepción jurídica.

El corazón de toda acción, la pasada y la de ahora, ante violaciones es el non-refoulement; algo escrito en la Convención de Ginebra de 1951. Esta ley impide a los países deportar a alguien a lugares donde peligran, hoy esto es una norma que todos, hasta los países no firmantes, deben cumplir.

En la supervisión de la migración, los tribunales regionales transformaron la teoría a la práctica.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus consultas, dejó bien claro que los procedimientos de deportación deben respetar el debido proceso, eso incluye la asistencia legal, intérpretes y la posibilidad de cuestionar decisiones.

Similarmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marcó puntos importantes contra las expulsiones en masa o "devoluciones en caliente", porque la falta de revisar la vulnerabilidad individual de cada migrante viola directamente los derechos humanos.

Esas acciones no solo arreglaron daños, también forzaron a los Estados a cambiar sus leyes para ajustarse a la dignidad.



Pero, el análisis de la gestión migratoria muestra áreas grises complejas, por ejemplo la externalización de fronteras.

Esta táctica, donde los países acogen migras ceden el mando migratorio a otras naciones de paso, ofreciendo ayudas financieras, creó un hueco legal que la gente del mundo busca tapar. Al salir del control del país que acepta inmigrantes, es muy difícil que se rindan cuentas por lo que hacen en tierras lejanas. La ONU, en especial el Relator Especial de los derechos de los migrantes, incrementó el chequeo y las presiones, para que meter gente en "cárceles" sea la última opción y nunca se aplique a los niños por el bien de ellos. Por último, el Pacto Mundial para una Migración Segura de 2018 busca hacer un plan mundial para compartir las responsabilidades.

A pesar de que su esencia reside en el soft law, y carece de obligación legal directa, su importancia sobresale porque afianza un entendimiento colectivo: gestionar los flujos migratorios mixtos, abordándolos preventivamente en vez de limitarse a reaccionar o a castigar. Entonces, la aspiración principal de las acciones actuales busca cambiar de un modelo que frena físicamente a otro basado en la gobernanza, priorizando la protección social y el cuidado de la integridad física, reconociendo que la

situación migratoria irregular no priva a la persona de sus garantías primordiales ni de su derecho a pedir asilo, todo bajo un esquema de justicia procedimental.

La respuesta a nivel internacional ha tenido que adecuarse a la creciente complejidad de las técnicas de control estatal, con el objetivo de luchar contra la falta de transparencia en los sistemas de vigilancia recientes, además del marco legal previamente establecido. La supervisión de las bases de datos biométricas y de los algoritmos para perfilar racialmente ha sido, a lo largo de la historia, una de las medidas más efectivas. Las entidades de supervisión han comenzado a demandar que la utilización de tecnologías para el reconocimiento facial y el análisis de datos en las fronteras no se transforme en un instrumento de discriminación automatizada, estableciendo que la digitalización del control no puede ser una carta blanca para infringir la privacidad o el derecho a la presunción de inocencia del pasajero.

También se ha llevado a cabo un trabajo de incidencia muy fuerte en lo que se refiere a la transparencia en las agencias fronterizas que funcionan de manera independiente. Un ejemplo evidente de acción pasada es la insistencia para que se incluyan observadores de derechos fundamentales en las operaciones de campo, tanto en patrullas fronterizas americanas como en Frontex europeo. La finalidad de estas misiones observacionales ha sido eliminar el aislamiento de las áreas fronterizas,



posibilitando que personas independientes registren lo que ocurre en tiempo real y prevengan que las detenciones tengan lugar en un vacío informativo donde la voz del oficial siempre tiene más peso que la del migrante.



Por otra parte, el enfoque ha cambiado hacia la responsabilidad de las compañías privadas que obtienen ganancias a partir de la infraestructura de exclusión. Las acciones más recientes han tenido como objetivo responsabilizar tanto a las corporaciones que proveen tecnología de rastreo o administran centros de detención, como a los gobiernos, con el argumento de que respetar la dignidad humana es un deber también del sector privado. Esta "debida diligencia" empresarial busca que la actividad de control migratorio deje de ser lucrativa a expensas del sufrimiento de otros, promoviendo auditorías y sanciones éticas que dificultan la logística de la deportación masiva y propician una gestión más transparente y sujeta al escrutinio público en términos de movilidad.



Situación Actual

Hoy en día, la deportación ha pasado de ocurrir únicamente en la frontera a ser un fenómeno deslocalizado y muy tecnificado. Los países del Norte Global han implementado políticas de "externalización", cediendo la tarea de detener y devolver a los países de tránsito a través de presiones diplomáticas y acuerdos financieros, lo que transforma a los países periféricos en "muros humanos".

Este sistema se fundamenta en la inteligencia artificial, las bases de datos biométricas compartidas y los sistemas de vigilancia aérea, que posibilitan un seguimiento con gran precisión. Asimismo, la carencia de garantías procesales en los llamados "vuelos de deportación" y el incumplimiento sistemático del principio de non-refoulement (no devolución) han hecho que la situación se complique aún más, mandando a individuos de vuelta hacia situaciones de persecución política, catástrofes climáticas o violencia extrema de las cuales se habían escapado originalmente. En la actualidad, la deportación es una industria de seguridad mundial que mueve miles de millones de dólares, poniendo por encima el manejo de

flujos en lugar del resguardo de la vida humana.

La rapidez de las "deportaciones exprés" ha comprometido, en el ámbito jurídico, los principios esenciales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el contexto de la emergencia migratoria, varios países han establecido procedimientos sumarios que obstaculizan el acceso a una defensa legal eficaz o a la evaluación individualizada de cada situación, infringiendo así el derecho a obtener protección judicial efectiva. Una asimetría riesgosa se manifiesta en el sistema de gobernanza global: a pesar de que los tratados comerciales aseguran la libre circulación de mercancías y capitales, no hay una corte internacional con autoridad vinculante que proteja al migrante frente a la arbitrariedad del Estado en los procesos de expulsión.



El problema se ha intensificado hasta llegar a una magnitud de "omnipresencia punitiva", en la que el control migratorio penetra en los servicios públicos más elementales, difuminando la línea divisoria entre la vigilancia policial y la asistencia social. Es preocupante que la comprobación del estatus legal se haya vuelto un requisito para acceder a servicios de

salud, educación o vivienda en varias jurisdicciones, lo cual ha hecho de los funcionarios públicos agentes de control migratorio de facto. Esta tendencia no solamente empobrece la vida de las personas, sino que también rompe la cohesión social porque hace que poblaciones enteras deban vivir en la más absoluta clandestinidad por temor a que un procedimiento rutinario active una alerta para ser expulsados. Esto, en realidad, elimina cualquier oportunidad de integración real.



Al mismo tiempo, la narrativa política actual se ha orientado hacia una retórica de "emergencia permanente", que sirve para justificar la suspensión de los derechos esenciales bajo el pretexto de la seguridad nacional o del colapso de los sistemas públicos. Este enfoque ha posibilitado que se institucionalicen prácticas que antes eran excepcionales, como la denegación automática de entrevistas de asilo con base en criterios puramente estadísticos o la detención en áreas de tránsito sin límite temporal. El sistema actual ha desarrollado una modalidad de "invisibilización selectiva", en la que el migrante es aceptado como un recurso laboral a bajo costo en áreas críticas, pero no tiene ningún dispositivo de protección contra la explotación o el abuso, quedando



atrapado en un vacío legal donde su cuerpo es requerido para la economía. Sin embargo, su persona es rechazada por el derecho

La situación actual muestra una crisis de rendición de cuentas debido a la creciente falta de transparencia en los algoritmos de "análisis de riesgo" que se utilizan para determinar quién entra o quién es deportado. Estos sistemas de aprendizaje automático, en contraposición a las leyes escritas, funcionan con cajas negras procesales que no permiten a los abogados defensores interrogar la lógica que rige una orden de salida o una denegación de entrada. El reto actual es que la justicia no solo tiene que lidiar con el deseo político de los estados, sino también con una red técnica que sesga las determinaciones en función del origen o del perfil socioeconómico de la persona. Esta deshumanización del proceso hace que la migración sea una cuestión de cálculo de probabilidades, en la que se sacrifica la dignidad por una eficiencia tecnológica que ignora la complejidad de las tragedias humanas detrás de cada expediente.



Casos de Estudio

La migración, ya no es solo moverse, se convirtió en un gran problema para el derecho internacional. En años

recientes, el control fronterizo ya no solo regula el paso, adoptando una estrategia donde la soberanía choca con los derechos básicos.

Estados Unidos política "Tolerancia cero"

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, esta política no solo se ha reactivado en espíritu, sino que se ha expandido bajo nuevas modalidades, moviéndose de la frontera al interior del país, reportándose operativos masivos de ICE en ciudades principales como Chicago, Nueva York y Los Ángeles. enfocándose en personas con órdenes finales de deportación sin importar su tiempo en el país o lazos familiares. A finales de 2025, el gobierno canceló varios programas de Parole de Reunificación familiar para ciudadanos de Cuba, Colombia, El Salvador y Guatemala y Honduras. Esto ha dejado a miles de familias en un limbo legal, aumentando el miedo a la separación, ya no solo en fronteras. Y a partir de febrero de 2026, se implementaron nuevas tarifas alrededor de 100 dólares solo por solicitar asilo y cuotas anuales para mantener la solicitud activa, considerándose una forma de tolerancia cero económica

Criminalización o irregularidad administrativa

La mayoría de los migrantes latinos no tienen antecedentes penales; sin embargo, experimentan una

agresividad gubernamental significativamente mayor en su detención y expulsión que la de los inmigrantes de Europa u otros países desarrollados, que ingresan como turistas o a través del programa de exención de visa. Al violar los términos de su visa, cometen un delito civil y no el de "entrada ilegal".



Al no estar obligados a ocultarse, pueden vivir y trabajar en la economía blanca y de servicios sin estar bajo la lupa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Es poco común que el ICE realice una redada en una oficina de tecnología o en un barrio de clase media buscando a un europeo que haya excedido el plazo de su visa. El sistema asume que estos inmigrantes son "buenos inmigrantes" que simplemente olvidaron irse. El migrante latino a menudo es etiquetado como una "amenaza para la seguridad" o "delincuente", lo que justifica un trato más severo en algunos sectores de la sociedad. Por el contrario, el inmigrante europeo que excede el tiempo permitido por su visa es generalmente visto como un "delincuente administrativo".



Figura de Italia Devolución por delegación

En los últimos años, Italia ha seguido una forma de manejar la migración que varios grupos internacionales critican por violar los derechos humanos. Bajo la idea de devolución por delegación, Italia ha pasado sus responsabilidades legales a otros países, dejando a los migrantes sin protección. Una de las mayores críticas es el acuerdo con Albania. Esto significa que personas rescatadas en aguas internacionales son llevadas a centros de detención en Albania. Al revisar sus solicitudes de asilo ahí, se les dificulta mucho conseguir abogados italianos, traductores y procesos legales claros. Básicamente, se les encierra antes de verificar si tienen derecho a protección, lo cual va en contra del derecho a la libertad.

Devoluciones en caliente Grecia

La gestión migratoria en Grecia ha sido objeto de críticas a nivel internacional debido al uso sistemático de "devoluciones en caliente" (pushbacks), una práctica que se considera una de las violaciones más graves de los derechos humanos en las fronteras de la Unión

Europea. A diferencia de la "devolución por delegación" que se observa en Italia, el enfoque griego se distingue por la intervención física y violenta para evitar que los migrantes soliciten protección. Según el derecho internacional, específicamente la Convención de Ginebra, cualquier persona que pise el territorio de un Estado tiene el derecho de pedir asilo y que su caso sea evaluado de manera individual. En Grecia, las autoridades interceptan a los migrantes en las islas del Egeo o en la frontera terrestre del río Evros, expulsándolos de inmediato hacia Turquía sin registrar sus nombres ni permitirles comunicarse con un abogado.



Varios informes de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch han documentado que las devoluciones en caliente en Grecia no son solo un proceso administrativo, sino que implican acciones físicas y violentas. Se ha informado sobre el uso de balsas salvavidas sin motor, donde la guardia costera griega deja a los migrantes a la deriva en alta mar, expuestos a las corrientes que los arrastran hacia aguas turcas. Además, hay testimonios de agentes que confiscan teléfonos, dinero y, en ocasiones, ropa de los migrantes antes

de expulsarlos, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Hungría con discurso de "protección de la identidad nacional"

Hungría oficializó la violencia en la frontera, levantando vallas electrificadas y estableciendo "zonas de tránsito", que servían como centros de detención encubiertos. El gobierno castigó la ayuda a los inmigrantes y promulgó leyes que autorizan la deportación automática de solicitantes de asilo, impidiéndoles presentar su caso, contraviniendo las decisiones judiciales europeas.

Este enfoque de "fortaleza impenetrable" ha generado una fractura profunda en la cohesión institucional de la Unión Europea, transformando a Hungría en el principal exponente del desafío a la primacía del derecho comunitario. Al ignorar sistemáticamente las sentencias que exigen el fin de las devoluciones sumarias y el respeto al debido proceso, el gobierno húngaro no sólo ha precarizado la vida de miles de personas, sino que ha sentado un precedente de desobediencia que otros estados miembros han comenzado a replicar bajo retóricas similares de soberanía nacional.



Afganistán

Después de que los talibanes tomaran el control en 2021, el manejo internacional de los refugiados afganos ha sido irregular. A pesar de las promesas de evacuación, miles de aliados fueron desamparados o reubicados en países terceros, sin un estatus legal claro. En países de acogida, como los EE. UU., muchos se encuentran en el limbo del Permiso Humanitario, una situación de residencia temporal que les niega la estabilidad de una residencia permanente, manteniéndolos en una constante fragilidad legal.

Los retornados enfrentan deudas acumuladas y no tienen lugares donde vivir, sumándose a los millones de desplazados internos que ya colapsan las provincias afganas, para las mujeres y niñas deportadas, el regreso significa pasar de un entorno de ciertas libertades al aislamiento total bajo los decretos talibanes, que prohíben su educación y gran parte de su actividad profesional.

A pesar de que la ONU estima que más de 23 millones de personas en Afganistán necesitan ayuda urgente, los fondos internacionales han sufrido

recortes significativos en 2025 y 2026, dejando a las agencias humanitarias operando con apenas el 60% de los recursos necesarios.

Polonia

En la frontera con Bielorrusia, las autoridades polacas respondieron con una fuerte militarización, esto fue debido a lo que llamaron "guerra híbrida". Se implementó una zona de exclusión, negando el acceso a ayuda humanitaria y la prensa, y, a la par, llevando a cabo deportaciones forzadas de migrantes a bosques gélidos. Este enfoque causó varias muertes por hipotermia, demostrando cómo la seguridad nacional se convirtió en excusa para ignorar el derecho a la vida y el asilo.

Palestina

presenta un caso particular por la figura del refugiado intergeneracional, bajo el mandato de la UNRWA. La administración migratoria y la movilidad, en este sitio, están atadas por un sistema de permisos, muros, y controles, coartando el movimiento elemental. El constante desplazamiento forzado, que sucede en territorios ocupados, aunado a la carencia de un Estado que garantice el derecho a retornar, configuran una violación continuada de los derechos humanos bajo un régimen de control militar.



Ucrania y España

A pesar de que la inicial respuesta europea a la invasión de 2022 fue ejemplar, por la Directiva de Protección Temporal, la gestión evidenció un "doble rasero" lo cual ocurre cuando se juzga de manera distinta en función de personas e ideologías. Los ciudadanos ucranianos, al instante, gozaron de derechos, pero los no europeos escapando de la guerra, como estudiantes africanos y asiáticos, experimentaron segregación en las fronteras y trabas para obtener la misma protección. Esto evidenció sesgos raciales al administrar la urgencia.



España desplegó toda una serie de medidas destinadas a recibir y atender a las personas que huyen de la guerra de Ucrania y ha sido capaz de gestionar en tiempo récord 125.000 solicitudes de protección temporal, otorgándoles documentación que les permite el

acceso al permiso de trabajo, a la sanidad o el empadronamiento. Sin embargo, quienes llegan huyendo de otras guerras se enfrentan a meses de espera para poder solicitar protección internacional, cuando no a devoluciones en caliente, y al uso excesivo de la fuerza, como ocurrió el pasado mes de marzo en la valla de Melilla. Todas las personas que entraron en esa fecha eran solicitantes de protección internacional", señala Virginia Álvarez, responsable de política interior en Amnistía Internacional España. Amnistía Internacional ya puso de manifiesto que la medida demostraba cómo Europa, y concretamente España, poseen las herramientas necesarias para proteger a quienes huyen de la guerra, y que el enfoque de la 'Fortaleza Europa' es una elección de carácter político.



Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Sin embargo, las personas procedentes de países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur en España ante la carencia de rutas legales y seguras, han recibido un trato discriminatorio y, en ocasiones,

cruel por parte de las autoridades españolas, tanto en Melilla y Ceuta, como en las islas Canarias



QARMAS

1. ¿Qué mecanismos podrían garantizar que el traslado de individuos a jurisdicciones externas no anule su derecho a una defensa legal efectiva y al acceso a intérpretes calificados?
2. ¿Qué acciones se pueden tomar contra la justificación del uso de fuerza física y la confiscación de pertenencias básicas en frontera frente a la obligación internacional de preservar el derecho a la vida y la integridad de los desplazados?
3. De qué forma se puede garantizar que ninguna persona sea retornada a un entorno de riesgo real sin haber pasado por una evaluación individual y exhaustiva?
4. Como se pretende mitigar la desestabilización macroeconómica cuando las expulsiones masivas interrumpen los flujos de capital que sostienen el PIB regional?
5. ¿Qué medidas se proponen para que las infracciones de visa reciban el mismo trato administrativo, sin importar el origen del migrante?
6. ¿Cómo se garantiza que el derecho a solicitar protección internacional sea accesible para personas en situación de pobreza extrema?
7. ¿Qué protocolos de “interés superior del niño” se aplicarán para prohibir la detención de menores y asegurar los procesos migratorios para los padres?
8. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar el status de los trabajadores migrantes para que puedan denunciar condiciones abusivas laborales sin miedo a la expulsión?
9. ¿Qué medidas se pueden implementar para que los ciudadanos retornados al triángulo norte u otras regiones puedan integrarse productivamente?
10. ¿Qué mecanismos de libertad supervisada o centros de acogida abiertos se pueden implementar para que el estatus migratorio irregular no se



castigue con la privación de libertad?

11. ¿Cómo se podría garantizar que dentro de los centros de detención exista la presencia de la justicia y no se genere una violencia a los derechos humanos?

Matriz CDH

Estados unidos	malasia	méxico	rusia	japón
italia	palestina	lituania	alemania	nueva zelanda
greCIA	ucrania	reino unido	suecia	israel
hungría	chile	marruecos	españa	
afganistán	venezuela	sudán	brasil	
nicaragua	colombia	tailandia	uruguay	
polonia	francia	suiza	australia	



Referencias:

- **García Hernández, C. C. (2025).** *Crimigración: La amalgama entre el control migratorio y el sistema penal en el siglo XXI*. Editorial Jurídica Global.
- **Organización de las Naciones Unidas. (2026).** *Análisis sobre la externalización de fronteras y el impacto de las nuevas tarifas de asilo en el derecho internacional*. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
- **Amnistía Internacional. (2025).** *Grecia: El muro de la impunidad. Devoluciones en caliente y violencia sistemática en las fronteras del Egeo*. Amnistía Internacional.
- **Consejo de Europa. (2024).** *El modelo de externalización Italia-Albania: Un análisis sobre el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso*. Publicaciones del Consejo de Europa.
- **Pérez, M. & Aranda, J. (2026).** *Biometría y algoritmos de riesgo: La deshumanización del control fronterizo en la era digital*. Revista Iberoamericana de Derechos Humanos, 14(2), 45-68.
- **García, J. A. (s. f.).** El doble rasero. Pastoral SJ.
<https://pastoralsj.org/el-doble-rasero/>
- **Amnistía Internacional. (2022, 17 de junio).** España: La guerra de Ucrania visibiliza el doble rasero a la hora de proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución.
<https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-la-guerra-de-ucrania-visibiliza-el-doble-rasero-a-la-hora-de-proteger-las-personas-que-huyen-de-la-guerra-y-la-persecucion/>